

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18^{va.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. Conc. del S. 58

21 de agosto de 2018

Presentada por el señor *Ríos Santiago*

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN CONCURRENTES

Para expresar la más profunda preocupación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sobre potenciales violaciones a derechos civiles y constitucionales de ciudadanos estadounidenses de origen puertorriqueño residentes en el estado de la Florida, ante el pleito de clase incoado en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Norte de la Florida, denunciando prácticas discriminatorias en treinta y cuatro (34) condados de ese estado, a causa de diferencias en el idioma, que tienen el efecto de impedirles un libre y efectivo derecho constitucional al voto a estos ciudadanos; solicitar al Gobierno de la Florida que atienda con urgencia y premura, los reclamos igualitarios de los ciudadanos americanos de origen puertorriqueño que residen en ese estado, a tenor con la Ley Federal de Derecho Electorales de 1965, así como con la jurisprudencia federal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proceso migratorio en los Estados Unidos es uno constante desde los orígenes de la Nación. Por diversas razones, diariamente millones de ciudadanos estadounidenses a lo largo y ancho de toda la Nación, se encuentran en un proceso de constante movimiento, en búsqueda de mejores condiciones y oportunidades de vida para sí y para sus familias.

A lo largo de varias décadas, el proceso migratorio entre los Estados Unidos y Puerto Rico ha sido uno continuo. Ello se torna natural, dado el derecho constitucional de los puertorriqueños, como ciudadanos estadounidenses, a moverse libremente por

toda la jurisdicción de los Estados Unidos de América, como cualquier otro ciudadano de esta Nación. Como parte de ese proceso y probablemente, por su relativa cercanía al territorio puertorriqueño, además de sus condiciones climáticas, ha provocado que en las últimas décadas, cada vez más puertorriqueños hayan identificado al estado de la Florida el lugar adecuado donde establecer su segundo hogar.

El paso del huracán María por el territorio de Puerto Rico en septiembre del 2017, provocó que decenas de miles de puertorriqueños perdieran su hogar en su totalidad y otros tantos miles, vieran afectado el mismo. Ello provocó un vertiginoso incremento en el proceso migratorio de puertorriqueños hacia el continente, principalmente, hacia el estado de la Florida. De hecho, reconocemos que fueron las propias autoridades del estado de la Florida que alentaron y facilitaron ese proceso abriendo sus puertas y flexibilizando los procesos de registro como residentes de ese estado, a fin de que como tales, pudieran beneficiarse de los procesos de asistencia que se les pretendía proveer, como consecuencia de la empatía que despertó nuestra situación, a nuestros conciudadanos de toda la Nación, con nosotros, víctimas del mayor desastre natural en la historia de los Estados Unidos.

Como parte de ese proceso de atemperarse a su nueva vida en su nuevo entorno, los puertorriqueños han pretendido ser parte de la comunidad que los acogió, insertándose en la cotidianidad de estas, a tenor con sus leyes y reglamentos. Por nuestra larga tradición y apego a los procesos democráticos, los puertorriqueños reconocemos que uno de los deberes más importantes con la propia democracia que disfrutan, es la plena participación activa de esta, mediante el ejercicio del voto.

En días recientes se ha conocido de la radicación de una demanda de clase a nombre de las comunidades puertorriqueñas (*Rivera Madera et al v. Detzner et al*) en el estado de la Florida, sobre violaciones a su derecho a recibir orientación y materiales electorales en español en las juntas electorales locales, con el efecto de impedir que puedan ejercer efectivamente su voto en las elecciones de medio término en noviembre de este año, en contravención a lo dispuesto en la Ley de Derechos Electorales de 1965 (*Voting Rights*

Act of 1965). La demanda radicada en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Norte de la Florida, tiene como parte demandada al Secretario de Estado de la Florida, Ken Detzner y a Kim Barton, supervisora electoral del Condado de Alachua en Gainesville, donde la puertorriqueña Marta Valentina Rivera Madera, reside y está registrada para votar. Dicha demanda establece que: "la primera generación de población puertorriqueña ha incrementado significativamente tras el paso del huracán María". Añade además que: "la mayoría de los recién llegados fueron educados en escuelas en español en Puerto Rico y muchos no dominan el inglés". "...No serán hábiles para votar efectivamente a menos que se les provea de papeletas en español, materiales electorales y asistencia".

Marta Valentina Rivera Madera, es una puertorriqueña de tercera edad, (70 años) que se mudó a la ciudad de Gainesville para estar cerca de su hija, luego que el huracán María destruyera su hogar en Puerto Rico. Cumpliendo su deber ciudadano, la señora Rivera Madera, se registró para votar a principios del presente año 2018, con la ayuda de su hija, no obstante, encontró que todo el proceso electoral, incluyendo el propio registro, era en inglés, idioma que no domina a plenitud, haciendo su proceso uno difícil y obstaculizante.

"Estoy en búsqueda de ejercer mi derecho al voto tal y como siempre lo he hecho en Puerto Rico". "Quiero ser hábil para votar en el idioma que hablo mejor, porque tomo el voto como algo muy serio y siempre he procurado educarme acerca de los candidatos y los asuntos de interés antes de depositar mi papeleta en la urna, sin embargo, aquí en Gainesville, solo puedo obtener dicha información en inglés". Dijo doña Marta en un comunicado de prensa, asistida por las organizaciones: "Faith in Florida", "Hispanic Federation", "Mi Familia Vota Education Fund", "UnidosUS" y "Vamos4PR".

Desde su concepción, la Nación estadounidense se construyó sobre el principio cardinal de "un hombre un voto", destacando en este, el sentido de equidad que debe prevalecer entre cada ciudadano, indistintamente de su género, raza, color, credo, origen o condición social. Desde *Juarbe v. Board of Inspectors of the 24th Election District* en

1899, los puertorriqueños residentes en los Estados Unidos continentales, han consistentemente reclamado su derecho a participar en el ejercicio de la democracia mediante el voto.

La Ley Federal de Derechos Electorales de 1965, recoge ese principio. La misma estableció normas que prevenían prácticas discriminatorias cometidas por juntas electorales, principalmente en estados del sur de los Estados Unidos, que impedía el libre ejercicio del voto contra minorías. El discrimen por razones de idioma, era una manifestación de esa práctica, al obstaculizar a ciudadanos cuya lengua predominante no era el inglés, -particularmente contra puertorriqueños-, a que pudieran estar informados para votar efectivamente. Posteriormente, esta Ley protectora sufrió una significativa variante. Según reza en la sección de derechos al voto de los archivos digitales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 25 de junio del 2013, el Tribunal Supremo emitió su decisión en el caso de *Shelby County v. Holder*, 570U.S. ___, 2013 WL 3184629 (Nº. 12-96).

La decisión declaró inválida una disposición clave de la Ley Federal de Derechos Electorales. En concreto, la decisión abordó la fórmula de cobertura en la Sección 4(b) de la Ley de Derechos Electorales que identifica aquellas jurisdicciones cubiertas que, debido a indicadores de un historial de discriminación, fueron requeridas por la Sección 5 de la Ley de Derechos Electorales a solicitar certificación previa de la Procuradora General o del Tribunal de Distrito de Washington, DC, antes de implementar algún cambio de votación. Según el Departamento de Justicia, el efecto que tuvo la decisión de *Shelby County* es que las jurisdicciones identificadas mediante la fórmula de cobertura en la Sección 4(b), ya no necesitan solicitar la certificación previa antes de implementar cambios de votación, salvo si están amparadas bajo una orden judicial emitida por separado bajo la Sección 3(c) de la Ley de Derechos Electorales.

No obstante lo anterior, es la opinión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que la decisión del Tribunal Supremo de 2013, no afecta la validez de la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, la cual prohíbe la discriminación en la votación por

motivos de raza o por pertenecer a un grupo de minoría lingüística y la cual aplica a nivel nacional y de modo permanente. Asimismo, otras disposiciones de la Ley de Derechos Electorales que prohíben la discriminación en la votación siguen en vigor, así como también otras leyes federales que protegen los derechos al voto, tales como la Ley de Votación en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Exterior, la Ley Nacional de Inscripción de Electores y la Ley de Ayuda a América a Votar.

A tenor con lo anterior, es preciso que esta Asamblea Legislativa no pase por alto esta denuncia y exprese su honda preocupación sobre una reclamación, que tiene el efecto de denunciar una práctica que potencialmente afecta el derecho al voto a ciudadanos estadounidenses de origen puertorriqueño y que podría representar discrimen y la violación de sus derechos civiles y constitucionales.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Para expresar la más profunda preocupación de la Asamblea
2 Legislativa de Puerto Rico sobre potenciales violaciones de derechos civiles y
3 constitucionales de ciudadanos estadounidenses de origen puertorriqueño, residentes
4 en el estado de la Florida, ante el pleito de clase incoado en el Tribunal de Estados
5 Unidos para el Distrito Norte de la Florida, denunciando prácticas discriminatorias en
6 treinta y cuatro (34) condados de ese estado, a causa de diferencias en el lenguaje, que
7 tienen el efecto de impedirles un libre y efectivo derecho constitucional al voto a estos
8 ciudadanos; solicitar al Gobierno de la Florida que atienda con urgencia y premura, los
9 reclamos igualitarios de los ciudadanos americanos de origen puertorriqueño que
10 residen en ese estado, a tenor con la Ley Federal de Derecho Electorales de 1965, así
11 como con la jurisprudencia federal.

1 Sección 2.- Se ordena que copia certificada de esta Resolución Concurrente sea
2 enviada al Gobernador del estado de la Florida, la Asamblea Legislativa del estado de la
3 Florida, miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos del estado de
4 la Florida, a los senadores de los Estados Unidos por el estado de la Florida, al
5 Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la Comisión de Asistencia Electoral
6 de los Estados Unidos para su conocimiento y acción correspondiente.

7 Sección 3.- Se dispone, además, que copia certificada de esta Resolución
8 Concurrente sea remitida al Gobernador de Puerto Rico y a la Oficina de la
9 Comisionada Residente en Washington, D.C., Hon. Jenniffer González Colón.

10 Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
11 aprobación.

English Version

CONCURRENT RESOLUTION

To express the deepest concern of the Legislative Assembly of Puerto Rico, about potential violations of the civil and constitutional rights of Spanish-speaking Americans residing in the state of Florida, in the face of the class action lawsuit filed in the US District Court for the Northern District of Florida, denouncing discriminatory practices in thirty-four (34) counties of that state, for language reasons, which have the effect of preventing the free and effective right to vote of these citizens; request the Government of Florida to urgently and expeditiously address the equal claims of the Spanish-speaking Americans residing in that state, in accordance with the Voting Rights Act of 1965, as well as with federal jurisprudence.

STATEMENT OF MOTIVES

The immigration process in the United States is a constant one since the origins of the Nation. For various reasons, every day millions of US citizens throughout the

Nation are in a process of constant movement, in search of better conditions and life opportunities for themselves and their families.

Over several decades, the migration process between the continental United States and Puerto Rico has been a continuous one. This becomes natural, given the constitutional right of Puerto Ricans, as US citizens, to move freely throughout the jurisdiction of the United States of America, like any other citizen of this Nation. As part of that process, probably due to its relative proximity to the Puerto Rican territory, in addition to its climate, in recent decades more and more Puerto Ricans have identified the State of Florida as the right place to establish their second home.

The passage of hurricane Maria through the territory of Puerto Rico in September of 2017 caused tens of thousands of Puerto Ricans to lose their homes in their entirety and thousands of others to suffer significant damages to their properties. This caused a vertiginous increase in the migration process of Puerto Ricans to the continent, mainly to the state of Florida. In fact, we recognize that it was the authorities of the State of Florida that encouraged and facilitated this process by opening its doors and making registration processes to become residents of the state more flexible, so that as such, they could benefit from the assistance programs that they were intended to provide, as a consequence of the empathy that our situation aroused, to our fellow citizens of the entire Nation, with us, their fellow citizens, victims of the greatest natural disaster in the history of the United States.

As part of this process of tempering their new life in their new environment, Puerto Ricans have sought to be part of the community that welcomed them, inserting themselves in their daily lives, in accordance with their laws and regulations. Because of our long tradition and attachment to democratic processes, us Puerto Ricans recognize that one of the most important duties with the democracy that we enjoy is the full active participation of this, through the exercise of the vote.

In recent days, the filing of a class action lawsuit on behalf of Puerto Rican communities in the state of Florida has been known about (*Rivera Madera et al v. Detzner*

et al), in which there are accusations of violations of their right to receive orientation and electoral materials in Spanish at the local electoral boards, with the effect of preventing them from effectively exercising their vote in the midterm elections in November of this year, in violation of the provisions of the Voting Rights Act of 1965. The lawsuit filed in the US District Court for the Northern District of Florida has as defendant the Secretary of State of Florida, Ken Detzner and Kim Barton, Alachua County Supervisor of Elections in Gainesville, where the Puerto Rican Marta Valentina Rivera Madera resides and is registered to vote. Said lawsuit establishes that: "the first-generation Puerto Rican population has increased significantly in the wake of Hurricane Maria". It adds that: "most of those recently arrived residents were educated at Spanish-language schools in Puerto Rico and many are not proficient in English." "...They will not be able to vote effectively unless they have access to Spanish-language ballots, election materials, and assistance."

Marta Valentina Rivera Madera is a Puerto Rican senior citizen, (70 years old) who moved to the city of Gainesville to be close to her daughter after Hurricane Maria destroyed her home in Puerto Rico. Fulfilling her civic duty, Mrs. Rivera Madera registered to vote at the beginning of this year, 2018, with the help of her daughter; however, she found that the entire electoral process, including the registration itself, was in the English language, language that she has not fully mastered, making the process difficult and hindering for her.

"I am looking forward to exercising my right to vote as I have always in Puerto Rico. I want to be able to vote in the language I speak best because I take voting very seriously and have always educated myself about the candidates and issues before casting my ballot; however, here in Gainesville I can only get information in English." Mrs. Marta said in a press release, assisted by the organizations: "Faith in Florida", "Hispanic Federation", "Mi Familia Vota Education Fund", "UnidosUS" and "Vamos4PR".

Since its conception, this Nation was built on the cardinal principle of "one man one vote", highlighting in this, the sense of equity that must prevail among each citizen,

regardless of gender, race, color, creed, origin or social condition. Since "*Juarbe v. Board of Inspectors of the 24th Election District*" in 1899, Puerto Ricans residing in the continental United States have consistently claimed their right to participate in the exercise of democracy through voting.

The Voting Rights Act of 1965 reflects this principle. It established norms that prevented discriminatory practices committed by electoral boards, mainly in southern states of the United States, which prevented the free exercise of the vote against minorities. Discrimination based on language was a manifestation of that practice, by obstructing citizens whose predominant language was not English, -particularly against Puerto Ricans-, so that they could not be informed to vote effectively. Subsequently, this protective Law suffered a significant variant. As stated in the voting rights section of the digital archives of the United States Department of Justice, on June 25, 2013, the Supreme Court issued its decision in the case of *Shelby County v. Holder*, 570U.S. ___, 2013 WL 3184629 (No. 12-96).

The decision declared invalid a key provision of the Voting Rights Act. Specifically, the decision addressed the coverage formula in Section 4 (b) of the Voting Rights Act that identifies those covered jurisdictions that, due to indicators of a history of discrimination, were required by Section 5 of the Voting Rights Act to request prior certification from the Attorney General or the District Court of Washington, DC, before implementing any change in voting. According to the Department of Justice, the effect of the Shelby County decision is that the jurisdictions identified by the coverage formula in Section 4 (b) no longer need to request prior certification before implementing voting changes, unless they are covered under a court order issued separately under Section 3 (c) of the Voting Rights Act.

Notwithstanding the aforementioned, it is the opinion of the United States Department of Justice that the decision of the Supreme Court in 2013 does not affect the validity of Section 2 of the Voting Rights Act, which prohibits discrimination in voting for reasons of race or for belonging to a group of linguistic minority and which applies

nationally and permanently. In addition, other provisions of the Voting Rights Act that prohibit discrimination in voting remain in effect, as well as other federal laws that protect voting rights, such as the Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Rights Act, the National Voter Registration Act, and the Help America Vote Act of 2002.

In light of the above-mentioned, it is necessary that this Legislative Assembly does not ignore this complaint and express its deep concern about a claim, which has the effect of denouncing a practice that potentially affects the right to vote of the Spanish-speaking Americans and which could represent discrimination and the violation of their civil and constitutional rights.

BE IT RESOLVED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF PUERTO RICO:

1 Section 1.- To express the deep concern of the Legislative Assembly of Puerto
2 Rico about potential violations of civil and constitutional rights of Spanish-speaking
3 Americans residing in the State of Florida, in the face of the class action lawsuit filed in
4 the US District Court for the Northern District of Florida, denouncing discriminatory
5 practices in thirty-four (34) counties of that state, for language reasons, which have the
6 effect of preventing a free and effective right to vote of these citizens; request the
7 Government of Florida to urgently and expeditiously address the claims of the Spanish-
8 speaking Americans residing in that state, in accordance with the Voting Rights Act of
9 1965, as well as with federal jurisprudence.

10 Section 2.- A certified copy of this Concurrent Resolution shall be forwarded to
11 the Governor of the State of Florida, the Legislative Assembly of the State of Florida,
12 members of the United States House of Representatives for the State of Florida, to the
13 Senators of the States United for the State of Florida, the Department of Justice of the

1 United States and the US Elections Assistance Commission for their knowledge and
2 corresponding action.

3 Section 3.- It is also provided that a certified copy of this Concurrent Resolution
4 shall be forwarded to the Governor of Puerto Rico and to the Office of the Resident
5 Commissioner in Washington, D.C., the Hon. Jenniffer González Colón.

6 Section 4.- This Concurrent Resolution shall go into effect immediately after its
7 approval.